



Destilados amargos
GUSTAVO DUNCAN

Sentido de responsabilidad

En sus estudios sobre el político profesional en las nacientes democracias occidentales, Weber llamó la atención sobre una de las cualidades que debe poseer en el manejo de los asuntos públicos: el sentido de responsabilidad. El político debe saber poner límites a sus pasiones y convicciones ideológicas para ajustarse a la medida de lo posible y lo conveniente en las consecuencias de sus decisiones dadas las circunstancias de la sociedad.

Durante su campaña a la alcaldía de Bogotá Claudia López dio rienda suelta a sus pasiones políticas. Tuvo grandes problemas para evitar que sus emociones la llevaran a saturar a los votantes y se decidieran por un candidato menos atemperado. El discurso incendiario es útil para apasionar a los seguidores radicales, pero puede causar preocupación entre sectores moderados que desconfían de un líder que pueda llevar al gobierno a situaciones conflictivas e intransigentes.

Por eso, el temor era que López en la alcaldía continuara con el mismo lenguaje de la campaña. Sin embargo, muy rápidamente, incluso desde antes de su posesión, dio un giro en su forma de hacer política. Ante todo, comprendió que su cargo como alcaldesa exige un enorme sentido de responsabilidad y que las decisiones, al margen de qué tanto se ajusten a sus convicciones ideológicas, hay que tomarlas en la justa medida de sus posibles efectos y riesgos.

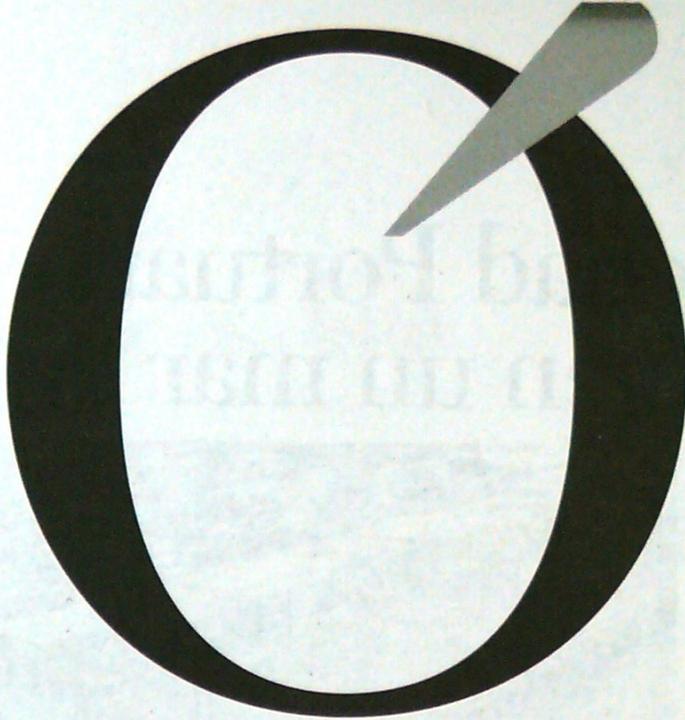
Quizá no haya un tema en que se note tanto este sentido de la responsabilidad como el de su postura frente a las marchas y la protesta universitaria. López fue elegida desde coaliciones políticas de izquierda, con enormes simpatías hacia estos movimientos. Se presumía que una de las bases para legitimar su mandato iba a ser el respaldo incondicionado hacia ellos.

Ya a finales del año pasado marcó distancias al hablar con el presidente Duque sobre las marchas. Dijo que sentía que había sentimientos legítimos en la protesta, la apoyaba, pero fue enfática en que ni la dirigía ni aspiraba a apropiarse de ella.

La semana pasada dio un paso más contundente. En una sesión del consejo superior de la Universidad Distrital le reclamó a un líder estudiantil por su silencio ante la presencia de encapuchados en la marcha y sus actos vandálicos. La contundencia de su reclamo fue, además, brutal. En un video mostró cómo los encapuchados lanzaban ladrillos y piedras desde la azotea de un edificio, lo que contradecía la versión de la red de derechos humanos de la universidad que sostenía que hubo una agresión unilateral del Esmad.

López dejó en evidencia una situación sistemática en muchas organizaciones defensoras de derechos humanos: su silencio ante la violencia y las agresiones cometidas por determinados sectores políticamente afines. ¡De hecho, en una entrevista en la WRadio, al día siguiente del reclamo, los líderes estudiantiles fueron reacios a condenar a los encapuchados, justificaron sus actos en las injusticias estructurales de la sociedad colombiana!

Para López este tipo de condenas constituyen un riesgo político enorme. Significa que puede perder el respaldo de sectores de izquierda que eventualmente podrían ver en su discurso una traición a las ideas con que la apoyaron. De allí que es tan valioso que apele al sentido de responsabilidad por encima de las conveniencias políticas. Un gobernante responsable no puede ser ambiguo con la justificación de la protesta violenta.



Actualidad
FERNANDO CEPEDA ULLOA

Fronteras

No se había escrito un trabajo tan completo como el de la profesora Annette Idler sobre las fronteras colombianas, principalmente la colombo-venezolana y la colombo-ecuatoriana. Fueron 10 años de trabajo de campo que incluyó, también, más de 600 entrevistas. El título del libro que ya Random House está traduciendo al Español es: 'Batalla en las fronteras, violencia, crimen y gobernanza en las márgenes de la guerra de Colombia'.

El tema de las fronteras tiene una vigencia global renovada. Por ello no es sorprendente que la Universidad de Oxford, en uno de sus prestigiosos colegios, tenga un programa sobre el Carácter Cambiante de la Guerra, que dirige esta Profesora que ahora comparte su esfuerzo académico con colegas en la Universidad de Harvard.

Colombia tiene el privilegio de que se haya realizado una investigación de esta envergadura. Y, más importante aún, que la profesora Idler continúe su esfuerzo en virtud de programas generosamente financiados por Canadá, Gran Bretaña e instituciones filantrópicas.

He tenido el privilegio de participar en cuatro seminarios, en los cuales se examinan nuevas situaciones que cuentan con la presencia de académicos, representantes de organismos internacionales, el Gobierno colombiano, fundaciones, funcionarios del Gobierno Nacional, miembros de la Fuerza Pública y, claro está, académicos de la Universidad de Oxford, la Universidad de Yale y, sobre decirlo, directivos y funcionarios de diferentes agencias de las Naciones Unidas. Siempre son muy reveladores los informes de personeros, educadores o académicos cercanos a estas zonas fronterizas.

Es hora de que tanto el Gobierno Nacional como los organismos internacionales, la sociedad civil y la academia, propicien un mecanismo interinstitucional que aproveche no solamente esta investigación que se fue realizando en un período durante el cual la crisis humanitaria y el consecuente agravamiento de otros factores no habían alcanzado la descomunal dimensión que hoy realmente nos apabulla. Y, paradójicamente, al mismo tiempo que mecanismos institucionales que habían probado eficacia, han venido desapareciendo o debilitándose, la verdad sea dicha, a partir de hace diez años. Algunos conceptos permisivos apreciaron la dimensión de esta crisis. No solamente el divorcio entre el centro y la periferia en la que se desenvuelve la vida de las fronteras, que se traduce, como dice uno de los informes de divulgación de esta investigación, en la "presencia deficiente del Gobierno y un concepto favorable para la impunidad". Así se favorece el fortalecimiento y proliferación de estructuras violentas no estatales.

La interacción entre estos grupos violentos ofrece varias formas: enemistad, rivalidad y amistad. O sea, una realidad tremendamente compleja. Hay una reconfiguración permanente del comportamiento de estos grupos armados y de sus relaciones con la sociedad. Existe una especie de contrato social entre estas organizaciones violentas no estatales y la ciudadanía, como único mecanismo de supervivencia.

Como dice uno de los informes "provee seguridad ciudadana en la sombra. La línea borrosa entre respeto y temor por parte de los ciudadanos hacia los sectores armados se manifiesta en impactos psicológicos y la naturalización y legitimación de imposiciones violentas de poder". La creciente inmigración hace que esta crisis adquiera características de tragedia humanitaria como jamás lo habríamos podido imaginar. Los últimos datos estadísticos hablan de más de 1'700.000 inmigrantes, 432.000 de ellos en Bogotá. Aparte de la figura del desplazamiento que ha sido tan brutal en Colombia, ahora se añade la del confinamiento. Y así, etc., etc.

Editorial

Impuesto al carbono

Las buenas ideas hay que replicarlas, en especial cuando sirven a la que puede ser la causa más importante hoy para la humanidad: la de la lucha contra el cambio climático. Costa Rica representa el ejemplo a seguir, mientras Colombia es el ensayo que se muestra prometedor.

Así lo aseguran los ministros del Medio Ambiente de ambos países cuando se refieren al impuesto al carbono, una contribución que se revierte en programas de recuperación de los ecosistemas, de reforestación y de restauración de los hábitats naturales. La fórmula es simple; quienes explotan, producen y usan combustibles fósiles pagan un tributo para compensar el perjuicio que ocasionan en la biósfera las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono.

La nación centroamericana fue pionera en la aplicación del gravamen. En 1997, cuando aún no se sabía a ciencia cierta la magnitud del daño que se le causaba al Planeta ni las consecuencias devastadoras para la conservación de la naturaleza y la continuidad de la vida, Costa Rica decidió cobrar un tributo del 3,5% sobre el petróleo, el gas y carbón. Con ese dinero recaudado comenzó a financiar la protección de sus reservas naturales, a repoblar las selvas y bosques, a pagar compensaciones a quienes protegen esos recursos o a educar para que se aprenda a usarlos de forma sostenible y responsable.

El país no se sentó a esperar que le llegarán las ayudas internacionales, tan prometidas y tan etéreas. Decidió dar el primer paso, como lo había hecho 10 años antes al establecer en su Constitución el derecho ciudadano a tener un medio ambiente sano luego de ostentar la tasa más alta de deforestación del mundo, y como resultado del cobro tributario hoy la cobertura forestal alcanza el 52%, la cuarta parte de su territorio está declarada como zona de reserva natural y el 90% de la energía que consume proviene de fuentes renovables. En todo ello se reinvierten los 26,5 millones de dólares que recauda al año por el impuesto al carbono.

Colombia aprobó en el 2016 un gravamen de 5 dólares por cada tonelada de carbono emitido, lo que le permitió recoger en los dos primeros años 239 millones de dólares. Los dineros, que administra el Fondo para la Paz, se utilizan para mitigar la erosión costera, reducir la deforestación y conservar las fuentes de agua así como los ecosistemas estratégicos, mientras que un 5% se destina a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es apenas el comienzo de lo que se espera sea una fuente importante de financiación de las acciones que requiere el país para luchar contra el cambio climático.

Por esos resultados ya tangibles en Costa Rica y con buen comienzo en Colombia, es que sus ministros de Medio Ambiente han invitado a través de un artículo científico publicado en la revista Nature a que otras naciones adopten la medida. Si los 17 países donde se concentra el 70% de la biodiversidad del mundo, 13 de los cuales albergan bosques tropicales, consiguieran esos recursos para revertirlos en la recuperación y conservación de su naturaleza, se haría el aporte más importante a la lucha contra el calentamiento global. Lo cual no significa exonerar de su responsabilidad, incluida la de pagar por el daño que provocan, a aquellos Estados que más contribuyen a contaminar el planeta.

GoVa



Texto disponible en audio. Descargue el APP AudioLector, escanee el código QR y escuche la nota

ElPaís

El Diario de nuestra gente

Fundado el 23 de abril de 1950. El País es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa y AMI.

Álvaro Lloreda Caicedo
Fundador

María Elvira Domínguez Ll.
Directora y Gerente General

Diego Martínez Ll.
Director de Información

Luis Guillermo Restrepo S.
Director de Opinión

Paola Andrea Gómez P.
Jefa de Redacción

Ossiel Villada T.
Jefe de Redacción web

El País S.A.
Hermann Doering
Gerente Comercial

Gustavo A. Delgadillo
Gerente de Operaciones

Commutador general:
898 7000
Redacción diurna:
685 7000
Redacción nocturna:
889 8109 y 685 7044
Carrera 2 No. 24-46
Cali, Valle, Colombia
email:diario@elpais.com.co

LOS ESCRITORES DE LOS COLABORADORES SÓLO COMPROMETEN A QUIENES LOS FIRMAN.